



## Transversal José García Montalvo

Catedrático de  
Economía (UPF)

# Impuestos ¿desperdiciados?



Estamos acostumbrados a que nos expliquen cómo las nuevas tecnologías, el *big data* y la inteligencia artificial cambia la forma en la que las empresas desarrollan sus negocios. Marketing personalizado, recomendaciones automatizadas, logística hiperoptimizada, transferencias y operaciones bancarias sin desplazarse a la oficina, etcétera. Pero ¿cómo se ve afectado el sector público? El ciudadano tiene la posibilidad de hacer muchos trámites administrativos por internet, desde pagar el IBI hasta las multas de tráfico, consultar normativas, etcétera. En el caso español, los algoritmos para *big data* más sofisticados de cualquier organismo público residen en la agencia tributaria. Herramientas como Zujar o Electra y métodos analíticos avanzados como Midas o Teseo junto con sofisticados procedimientos de *web-scraping* (muy utilizados, por ejemplo, para descubrir alquileres no declarados) permiten a la administración tributaria controlar a los olvidadizos y a los defraudadores.

Desgraciadamente esta sofisticación en la recaudación impositiva no se extiende a la evaluación del gasto público. En este caso, lo único que se hace, en general, es asegurarse de que se rellenan los papeles correspondientes y se gasta el presupuesto. El político de turno no le dice al ciudadano “tal programa conseguirá una inserción laboral de desempleados de larga duración de 10 puntos superior a su ausencia”, sino “se han gastado 1.500 millones en tal o cual programa” o “nuestro objetivo es que el gasto público alcance el 45% del PIB”. Pero ¿qué resultados se han obtenido o se esperan obtener? Esto parece que no es importante.

La Airef ha mostrado recientemente que no es capaz de saber qué se gastan las administraciones públicas en políticas activas de empleo, bien porque no le han facilitado datos adecuados o, seguramente, porque ni las mismas administraciones lo saben. Además, con todos los controles que nominalmente se establecen, resulta que las subvenciones públicas tienen falta de transparencia y problemas contables básicos. Y lo peor de todo, el gasto no consigue los objetivos que pretende. Por ejemplo, la Airef señala que el programa estatal Prepara, destinado a parados de larga duración, con un coste de 1.500 millones, “no mejora la probabilidad de incorporarse al mercado laboral” sino que “genera desincentivos” en los meses que dura la prestación. El motivo es que lo único que importa es el cumplimiento de las condiciones formales para conceder la subvención y no si los cursos de formación propuestos consideran las necesidades de las empresas. Lo importante es que se ejecute el gasto aunque sea a base de otro curso más de *Windows para principiantes*. Peor aún: hace 24 años dirigí una evaluación sobre el impacto de los programas de inserción laboral financiados por el FSE y encontré exactamente los mismos problemas que la Airef ha destacado recientemente: falta de información, programa no preparado para ser evaluado y, con los métodos que se pudieron emplear dados los datos disponibles, falta de efectividad del programa por el mismo motivo (los cursos eran en gran parte de relleno).

Esto no es una novedad. Por ejemplo, la Airef también señala que los incentivos públicos a la contratación basados en bonificaciones a las cotizaciones de las empresas no son eficaces. El problema es que ya los sabíamos antes de que se aprobara la última ronda de bonificaciones.

Desgraciadamente, en lugar de exigir

que todo programa de gasto público se evalúe adecuadamente para saber si es efectivo o no, lo único que parece importar es que se realice el gasto correspondiente y se rellenen los papeles. La mayoría de las administraciones son refractarias a la evaluación de sus políticas y, por tanto, no están dispuestas a compartir sus datos ni siquiera con los científicos sociales. Las excusas son de todo tipo, aunque la normativa de protección de datos es uno de los recursos más utilizados, a pesar de las excepciones que esta establece para el caso de la investigación social y los procedimientos cada vez más sofisticados de anonimización de la información. Es cierto que las cosas están cambiando en España, aunque muy lentamente. La *Muestra continua de vidas laborales* de la Seguridad Social o el grupo de declarantes de IRPF son un conjunto de datos muy útiles para realizar investigación económica en temas de gran relevancia social. Pero seguimos a años luz de otros países como Dinamarca, Francia o Estados Unidos.

En un momento en que las encuestas, que han sido el recurso habitual en el pasado son cada vez menos útiles por el aumento significativo de las tasas de no respuesta, la ingente cantidad de datos administrativos existente es una fuente fundamental de información para la evaluación de políticas y la investigación económica. Por ejemplo, en Estados Unidos se puede conocer con precisión la movilidad social (qué barrios ofrecen mayores oportunidades económicas de salir de la pobreza a niños de clases desfavorecidas) por raza, nivel de renta de los padres y género (<https://www.opportunityatlas.org/>). Conseguir la fusión de las bases de datos existentes para hacer este ejercicio en España es simplemente impensable.

En resumen: para recaudar, el *big data* y los algoritmos son de utilización intensiva, pero respecto a los resultados de los programas de gasto públicos no sabemos ni cuanto suman. Seguro que si los ciudadanos tuvieran información adecuada sobre la efectividad de los programas de gasto acometidos con sus impuestos no contestarían en las encuestas que pagan impuestos en exceso. De hecho, en una encuesta de la OCU el 85% de los españoles contestaron que estarían dispuestos a pagar más impuestos si eso supusiera una mejora de los servicios públicos que reciben los ciudadanos. Mostrémosles que efectivamente supone una mejora. |



**Algoritmos**  
**El sector público**  
**usa sofisticados**  
**algoritmos para**  
**recaudar, pero**  
**hace muy poco**  
**esfuerzo para**  
**evaluar la**  
**efectividad del**  
**gasto público**